

Crisis de representatividad y estallido social. Una aproximación a la actual experiencia chilena

Andrea Mira S.

Universidad de Concepción, Concepción, Chile.

Email: andremira@udec.cl

Resumen: De un tiempo a la actualidad el denominado modelo chileno se encuentra en jaque. Las exigencias de la sociedad civil chilena se vuelven palpables por las calles de nuestro país. La molestia y, por consiguiente, protesta social, ha tomado cada vez más fuerza y adhesión entre quienes no se sienten representados en lo más mínimo ni por el Estado ni por la clase política, generando como resultado diferentes frentes de conflictividad, tales como activistas ecológicos, trabajadores del cobre, estudiantes secundarios y universitarios, profesores y el pueblo mapuche entre otros, que han desembocado en la amplia impopularidad y rechazo del ahora Presidente de Chile, Sebastián Piñera. No obstante, la dicotomía generada es interesante. Mientras en el foro interno del país se sucede una histórica protesta social de proporciones por la amplia brecha de desigualdad, éste refleja una pujante economía, cuyos indicadores macroeconómicos lo muestran como los mejores de América Latina.

Palabras Claves: movimientos sociales, crisis de representatividad, frentes de conflicto, estallido social

Crisis of representation and social outbreak. An approximation to the current Chilean experience

Abstract: From some time up to these days, the so called Chilean model is jeopardized. The requirements of the Chilean civil society become tangible on the streets of our country. The annoyance and, consequently, the social protest, has acquired increasing strength and adhesion among those who do not feel represented in the least neither by the State nor by the political class, generating thus different fronts of conflict, such as ecological activists, copper mining workers, secondary and university students, teachers and the Mapuche people among others, which has ended in the wide unpopularity and rejection of the present President of Chile, Sebastián Piñera. Nevertheless, the created dichotomy is interesting. While in the country's internal front an historical social protest of proportions takes place, due to the wide gap of inequality, at the same time Chile reflects a forceful economy, whose macroeconomic indicators places it at the top in Latin America.

Key words: social movements, crisis of representation, fronts of conflict, social outbreak

Crise da representação e da agitação social. Uma aproximação da experiência atual do Chile.

Resumo: Há algum tempo o chamado modelo chileno está em xeque. As demandas da sociedade civil chilena se tornar palpável nas ruas do nosso país. O desconforto e, conseqüentemente, o protesto social, cada vez mais tem tomado força e adesão entre os quais se sentem representados na coisa mais mínima nem para o Estado nem para a classe política, gerando, como provou diferentes frentes de conflito, como ativistas ecológicos, os trabalhadores da o cobre, os estudantes secundários e universitários, professores e pessoas Mapuche entre outros, que não tenham terminado na impopularidade de largura e rejeição do atual presidente do Chile, Sebastián Piñera. No entanto, a dicotomia gerada é interessante. Enquanto que no foro interno do país um protesto histórico social de proporções acontece para a grande diferença e desigualdade, este reflete uma economia em expansão, e os indicadores macroeconômicos que mostrar a ele como o melhor da América Latina.

Palavras-chave: movimentos sociais, crise de representatividade, áreas de conflito, agitação social

* * *

Introducción

Tal como se ha señalado, este año 2011 se ha caracterizado por las masivas movilizaciones y el amplio descontento social por parte de estudiantes y ciudadanos, quienes exigen cambios sustanciales. Es común ver tanto, las principales avenidas de la capital chilena, Santiago, como las capitales regionales y provinciales, rebosadas de miles y miles de estudiantes secundarios, universitarios, profesores, dueñas de casas, activistas ecológicos, trabajadores del cobre, entre otros, indignados exigiendo soluciones claras y concretas.

Claro está que, de cara a este fenómeno social nos encontramos en un escenario en el que existe un enorme vacío de poder, traducido en el fracaso de un estilo de gobierno tecnócrata, y para cuya sociedad la única vía de expresión de la ciudadanía y de su impotencia, además de la impulsividad a fin de marcar presencia y exigir sus derechos y respeto, es definitivamente la calle.

Frente a este escenario, el fracaso del gobierno de turno cala hondo. No obstante, a pesar de la histórica baja en la popularidad del Presidente Piñera, traducida en la más baja aprobación para un gobernante (26% CEP, junio-julio 2011) desde que existe la encuesta del Centro de Estudios Públicos¹, la cual se remonta desde el regreso de la democracia en 1990, también afectó a la oposición o también llamada Concertación, que presentó una considerable baja en la popularidad, contando sólo con un respaldo del 17% y una desaprobación del 46%. Sumados también a los penosos resultados de los sondeos Adimark².

Evidente es que los movimientos sociales y la ciudadanía en general, no se sienten representada ni por los partidos políticos, ni por las instituciones. Por el contrario, existe un cuestionamiento del orden institucional, sumado a la casi nula creencia en la entrega de soluciones.

En consecuencia, estamos frente a un descontento generalizado, el cual se manifiesta en relación con el actual gobierno, poniendo en duda y desconfiando de este y de su promesa de una “nueva forma de gobernar”, así como también se da con las otras instituciones del Estado.

Por lo tanto cabe preguntarse ¿Qué es lo que ha sucedido con el Chile que era considerado un ejemplo de estabilidad y éxito de Latinoamérica?, ¿Cuál es la raíz de este histórico estallido social y crisis de representatividad de la sociedad civil de este país? En concordancia a lo expuesto, es que el presente artículo tiene por objeto exponer y reflexionar con respecto al modelo chileno y la crisis de representatividad de su sociedad, apuntando a las distintas aristas de conflicto y protesta social que lo ponen en jaque. Entendiendo, al mismo tiempo, estos acontecimientos como parte de un proceso histórico que generarán un punto de inflexión en la sociedad chilena.

Para lo anterior se pretenden analizar las diversas problemáticas que desatan este estallido social, tal es el caso de las Hidroeléctricas en Aysén, pasando por la huelga histórica de 45 mil obreros del cobre (Codelco), la inconformidad de los usuarios del transporte capitalino Transantiago, los ciudadanos de Dichato (VIII región) y la tardanza de su reconstrucción tras el terremoto ocurrido en febrero del 2010; finalizando así con la radicalización del movimiento más desafiante, masivo, potente y poderoso que lidera, afecta e identifica a la ciudadanía en casi su totalidad, (dada su demanda por cambios estructurales, tales como, cambios sustanciales en el carácter y rol del Estado, entre otros), es decir, el movimiento estudiantil y la criminalización y represión sufrida por sus actores.

Una mirada al descontento social y el movimiento estudiantil

El denominado modelo chileno, definitivamente se encuentra en jaque. Su dicotomía es evidente, mientras este modelo ofrece los mejores indicadores macroeconómicos de América Latina, al mismo tiempo, crea más pobreza y desigualdad. Un ejemplo de esta visión externa es lo publicado por el diario norteamericano *The New York Times*, (2011), quien al tratar la crisis de la educación chilena señaló: “A pesar de que Chile aparece en el exterior como un modelo de consistencia económica y administración fiscal prudente, hay un profundo descontento con el modelo neoliberal y sus consecuencias económicas para aquellos que no forman parte de la élite económica”. Es así como en los últimos 20 años, la economía chilena ha crecido a un promedio anual del 5,1% y el 2010 alcanzó un PIB per

cápita de 14.341 dólares, no obstante, permanece entre los 15 países más desiguales del planeta.

Y aunque la prosperidad económica del país más avanzado de América Latina es perceptible, resulta incuestionable que no se plasme en una mejora de la calidad de vida de las familias chilenas. Así, por ejemplo, en el 2006 el ingreso autónomo del 5% de los hogares más pobres era 500 veces inferior al del 5% más rico, mientras que en 2009 esa brecha se amplió hasta 830 veces (cifras según la OCDE).

En tal escenario porcentual, gana las elecciones presidenciales Sebastián Piñera, el primer mandatario conservador desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), y después de 20 años de la Concertación en el poder (1990-2010). Previo a las elecciones, Piñera era percibido como una persona que generaba dudas frente a su credibilidad, así como también conflictos de intereses; no obstante, se deduce que fue elegido no por popularidad, sino que por un voto de escarmiento hacia la Concertación, quienes paradójicamente pregonaban una democracia, mientras que al mismo tiempo perfeccionaban el modelo económico heredado por la dictadura (Jocelyn-Holt, et.al. 2001: 367-375)

Sin embargo, ¿por qué un estallido ahora? Frente a la problemática a tratar en la presente, es decir, el estallido social que se ha manifestado en diversos frentes, resulta clave desarrollar un breve y macro repaso de los acontecimientos sucedidos hasta la fecha.

Para aquello es necesario retroceder al mes de mayo de este año, y visualizar como inicio y despliegue de este estallido, la aprobación de un proyecto de cinco centrales hidroeléctricas en la Patagonia de Chile. Esta aprobación inauguró y catalizó el potencial descontento en variados sectores y movilizó manifestaciones masivas que dieron paso a un “movimiento ciudadano” cuyas demandas ya sobrepasan los embalses y se proyectan a la democratización del país.

Aproximadamente 80.000 personas marcharon el viernes 20 de mayo por el centro de Santiago (según la policía, 40.000), 50.000 el sábado 21 del mismo en el puerto de Valparaíso, (capital de la V región, ubicada 120 kilómetros al norte de la capital, lugar en el que el mandatario de turno hacía su rendición de cuenta anual al parlamento) y decenas de miles más en 26 ciudades³. Esta movilización superó todas las cifras de protesta desde que la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) dio paso a una democracia pactada con los sectores no comunistas de la oposición al régimen militar.

El conflicto por HidroAysén radica en la existencia de impedimentos para importar tecnologías no convencionales, los cuales podrían aportar hasta un 30% de la demanda energética a costos competitivos, con mayor énfasis en las áreas eólica y geotérmica. En concreto, esos impedimentos se originan en el dual monopolio que forman Endesa⁴ (empresa extran-

jera y donadora de una cantidad considerable a la fundación que dirige la esposa de Sebastián Piñera, Cecilia Morel) y Colbún, que controlan el 70% del mercado eléctrico de Chile, siendo estas dos empresas socias en HidroAysén, la que tal como se mencionaba, proyecta construir cinco represas en los ríos patagónicos Pascua y Baker, siendo este último el más caudaloso de Chile, y ambos considerados entre los más puros del planeta. Lamentablemente, Endesa, por su parte, posee los derechos de agua de ambos ríos, situación que sumó a la palestra la necesidad de nacionalizar el agua, privatizada durante la dictadura.

Al margen de lo anterior cabe señalar el incalculable valor ambiental de la región de Aysén, pues en esta sureña región se ubican el segundo lago más grande de América Latina y la segunda reserva mundial de agua dulce. La presentación de este proyecto fue en el año 2008, gobierno de la entonces mandataria Michelle Bachelet, fecha en la que creó una polémica reducida sólo a grupos locales y organizaciones defensoras de la Patagonia. Las, en ese momento, autoridades regionales, rechazaron un sinnúmero de aspectos y la Corporación Nacional Forestal (estatal) lo rechazó a cabalidad dada su intervención en áreas, tanto de, parques nacionales como de protección boscosa. Sin embargo, todas estas refutaciones se invisibilizaron desde la llegada al poder de Piñera.

El proyecto fue revisado sin considerar ninguna de las observaciones ciudadanas llevadas a cabo en el proceso reglamentario de consulta. Para llevarlo a cabo y transportar la energía desde Aysén, se requeriría instalar cientos de torres de alta tensión de setenta metros de altura en una trocha de 100 metros de ancho que pasaría por seis parques nacionales, once reservas nacionales, veintiséis sitios prioritarios de conservación y treinta y dos áreas protegidas privadas, deforestando unos 2.000 kilómetros cuadrados. Agregado a la necesaria reubicación de asentamientos humanos. La inversión total supera los 7.000 millones de dólares, y según cálculos, la tasa de lucro líquido superaría los 1.000 millones de dólares anuales.

Sumado al conflicto generado por el proyecto de HidroAysén, hay que agregar la condena de cuatro mapuches a 25 años de cárcel, acusados de delitos terroristas, (etnia que por su parte y como pueblo buscan cada vez con más fuerza un reconocimiento etnonacional) (Foerster y Vergara 2000) tensando nuevamente las relaciones entre los pueblos originarios y el Estado, tras una huelga de hambre que situó en controversia a ministros y jueces; el desarrollo de la huelga histórica llevada a cabo el 11 de julio⁵ de este año por 45 mil mineros del cobre, industria eje y emblemática de la economía chilena, quienes enfrentaron esta protesta como un reclamo de tono político e ideológico, no cediendo a, lo que denuncian, la intención de privatizar este sector, paralizando sus funciones por 24 horas, asegurando la entrega de documentos que detallan las intenciones oficialistas y proponiendo un referéndum relacionado a las políticas mineras, a fin de impulsar la renacionalización del cobre; así como también conflictos menores sucedidos, tal es el caso de la inconformidad y descontento de los usuarios

del Transantiago, sistema de transporte utilizado en la capital chilena; además de las paupérrimas condiciones en las que aún se encuentran pobladores de distintas ciudades afectadas por el terremoto ocurrido el pasado 27 febrero del 2010, tal es el caso de los habitantes de Dichato, VIII región.

No obstante, el punto de inflexión que marca la pauta actual es protagonizado por el movimiento estudiantil, quienes piden más igualdad, mayor participación del Estado y menos mercado. El conflicto por la educación radica en el cambio de la Constitución de 1980 promulgada durante la dictadura, carta magna que en su artículo 19 consagra la libertad de enseñanza entendida como, la facultad de lucrar con la educación, como uno de los aspectos más relevantes. Sin embargo, hasta ahora ni la Concertación, durante los 20 años que ocupó la presidencia, ni el actual oficialismo han mostrado la intención de modificar ese cuestionable precepto. La educación superior en Chile es una de las más caras del mundo desde la dictadura pinochetista.

La actual crisis en la educación, promovida por las manifestaciones estudiantiles y cuya consigna central es la educación sin fines de lucro, basa específicamente sus demandas en el fin del sistema municipalizado de la educación básica y media, en que los gobiernos de las ciudades se hacen cargo de los establecimientos gratuitos y reciben aportes del Estado dependiendo de la cantidad de alumnos, y en el cumplimiento de la ley que prohíbe el lucro en las universidades. Por consiguiente, este proceso se radicaliza a medida que avanza, volviéndose transversal, unificando y potenciando a los movilizadores y sus reclamos.

Dado que esta es una problemática que afecta a la sociedad en su conjunto, a los estudiantes se sumaron los profesores, padres, trabajadores, y el ciudadano común en las últimas manifestaciones, por lo que el avance de este reclamo, absolutamente legítimo, ha complicado al gobierno, quien ha tomado distintas estrategias tales como declarar vacaciones de invierno anticipadas, (una manera fallida de desmovilizar a los estudiantes), así como también el discurso por parte de la presidencia lanzando el GANE (Gran Acuerdo Nacional de la Educación), con un mayor presupuesto, aproximado a 4.000 millones de dólares, además de algunas bajas en las tasas de interés para los créditos universitarios, el aumento en el número de becas, y la invitación a “debatir” sobre la opción de distinguir entre universidades con y sin fines de lucro destacan entre la propuesta, sin embargo, los estudiantes no quieren endeudarse más, no quieren rebaja en las tasas de crédito, lo que no quieren es tener créditos, quieren una educación gratuita.

Para ellos esto es más de lo mismo, son solo soluciones parche. “Lamentablemente vemos que es más de lo mismo pero con unos pesos más”, tal como lo señaló Camila Vallejo, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile y una de las figuras más destacadas del movimiento que exige modificaciones al sistema. Las marchas estudiantiles, causaron tal revuelo por su adhesión y masificación que no pasaron indiferentes a los países extranjeros, entregando también una visión del

conflicto. Los medios internacionales centraron su mirada y críticas al manejo del mismo. Es así como surgieron fuertes críticas, portadas y reportajes de diversos medios de comunicación tales como los periódicos *El País*, *The New York Times*, *El Clarín*, la televisión pública argentina como *Visión Siete Internacional* y otros, destacándose entre ellos el duro análisis realizado por la prestigiosa *Revista TIME*. Este influyente medio estadounidense puso énfasis en el bajo aporte del Estado a las universidades tradicionales y destacó la masividad de las protestas de los últimos días en el país.

Llama la atención además el manejo de la prensa nacional. Las imágenes de violencia, el cómo los medios de comunicación han cubierto estos eventos. La inmensa mayoría de los medios de comunicación, básicamente la televisión chilena, hizo mucho hincapié en las imágenes de violencia que hubo durante las protestas, dando la impresión que existió mucha más violencia de la que realmente se había generado. Mostraban encapuchados, los carros lanzando agua contra los manifestantes, etc., pero por lo general no mostraban o daban mayor hincapié, por ejemplo, en cómo los jóvenes estaban vestidos simulando ser carabineros pero con un uniforme de cartón, o toda la creatividad de las manifestaciones de los estudiantes, de los jóvenes en las calles, situación que criminalizó al movimiento, entendiéndose también como se trataba de cambiar el eje de discusión. En vez de analizar y debatir el tema de la educación, se centraban en el tema de la violencia, los daños y los destrozos. En consecuencia, la controversia y revuelo generado por el movimiento estudiantil radica en cambios profundos a la institucionalidad vigente, planteando cambios profundos al sistema educacional, centrando y haciendo de este un conflicto político, pues razona a través de la educación un modelo de sociedad.

Crisis de representatividad

Al analizar el estallido social de la ciudadanía, resulta clave ir al trasfondo del conflicto, mirar más allá y ahondar en los requerimientos de la sociedad. Tal inconformidad se refleja en las fuertes bajas porcentuales entregadas en la última encuesta CEP. El presidente Sebastián Piñera, mostró un desplome de popularidad en las encuestas, las que se entienden como el fiel reflejo del estallido social de un país agobiado por la desigualdad, expresado en las masivas protestas.

Según la encuesta Adimark, el rechazo al mandatario ascendió en junio al 60% y su apoyo descendió al 31%, el nivel más bajo desde que asumió el poder en marzo de 2010, tras ganar las elecciones con un 51,61% de los votos, y, según la encuesta CEP la aprobación al mandatario llegaba sólo al 26%. Este descenso en la popularidad es el resultado de las masivas protestas en contra del lucro en la educación, así como del proyecto que contempla la construcción de represas en la Patagonia, añadido además a los conflictos regionales y laborales mencionados en las páginas anteriores. No obstante, este descenso en cifras no afecta sólo al presidente, sino que también al gobierno y a la oposición.

Por una parte, se observa un gobierno carente de credibilidad para solucionar estos conflictos, porque se entiende que es un representante de la desigualdad, dado quienes lo conforman y el tipo de decisiones que toma. Y por otro lado, la Concertación, según el sondeo de Adimark, obtuvo una desaprobación del 68%. Por lo tanto, el alto rechazo a Piñera se debe al acumulado malestar social durante muchos años en un país que está bajo el alero de la desigualdad, y cuyo descontento estalló con la llegada de un Gobierno colmado de empresarios, tal como lo fue el mismo actual mandatario.

Dado lo anterior, se puede deducir que estamos frente a una crisis de legitimación, de representación política, es decir, ahora hay una deslegitimación de lo que existe, que transforma todo este conflicto en una situación más grave. Lamentablemente la sociedad chilena no siente representatividad por parte de quienes lo deben hacer. Los ciudadanos en general están cuestionando a quienes eligieron para gobernar. Por lo que en el entre líneas, hay un desprecio hacia la política. Esta situación se exaspera debido a los mecanismos de credibilidad del gobierno. Cada vez que este invita a dialogar, lo hace tratando de invisibilizar y ante tal situación, la calle se vuelve la única herramienta de visibilización. La calle es el nuevo escenario de los movimientos sociales. Es más, frente a esta situación, resulta clara la intencionalidad de la brutal represión, comentada a nivel internacional, y llevada a cabo el día jueves 04 de agosto de este año, en contra del movimiento estudiantil. Dentro de esta dinámica, el gobierno sólo quería mostrar su poder y autoridad.

Sin embargo, el determinante central de esta inconformidad y estallido social es la llegada de la derecha al poder y las oportunidades políticas que ofrece un gobierno poco receptivo a la voluntad popular y al diálogo con las fuerzas opositoras. El cambio de alineaciones políticas, la división de las elites, la alta difusión de las causas y problemáticas en las redes sociales, la acción colectiva y los nuevos marcos culturales que resuenan en la población chilena serían los factores que inciden en el clima de indignación y de permanente movilización (Tarrow, 1997).

Existen varios factores estructurales, quizás no relacionados en su totalidad con el acontecer actual, pero que se interponen en esta aguda crisis política y social. Según los datos entregados por el estudio de indicadores sociales y educacionales de la OCDE (2011) y el estudio nacional de opinión pública realizado por el Centro de Estudios Públicos (2011) se puede observar que: 1) Chile presenta la mayor segregación socio-económica en el sistema educativo, es decir, una abismante división entre ricos y pobres que se origina en el aula; 2) presenta el mayor índice de desigualdad de ingreso entre los países miembros de la OCDE, incidiendo directamente en que sólo el 13% de los chilenos muestra confianza en sus conciudadanos; 3) se precisa que el núcleo familiar chileno aporta casi el 80% de los gastos de las universidades, siendo obligados a enfrentarse a una dura carga financiera en caso de acceder sus hijos a la educación superior; 4) el grado de inclusión de estudiantes de distintos niveles socio-económicos en

el sistema de educación chileno no alcanza el 50%; 5) tiene la tercera tasa de empleo más baja de la OCDE, así como también el porcentaje más bajo de trabajadores sindicalizados; 6) Con respecto al ingreso per cápita, las tasas de matrículas de las universidades chilenas se encuentran entre las tres más altas del mundo; 7) con un 26% de aprobación ciudadana a la gestión del presidente Piñera, el actual gobierno, enfrenta la peor crisis de legitimidad de los últimos 20 años. Al mismo tiempo, la Concertación cuenta con tan sólo un 17% de aprobación.

Sin embargo, Chile invierte 4,2% de su PIB en educación, a diferencia del 3,8% que destinan los otros integrantes de la OCDE, por lo que el problema básicamente es el gran derroche de estos recursos debido al tema del lucro. Por consiguiente, según los datos aportados por la OCDE, este organismo reconoce la existencia de avances en diversos ámbitos de la educación en nuestro país, no obstante, da cuenta de las deficiencias del aseguramiento de la calidad de la educación.

Definitivamente y al margen de la crisis educacional, las actuales movilizaciones de los actores sociales también son una consecuencia de la crisis de representatividad. Es absurdo pensar este estallido social como un eco aparte de la deslegitimación del voto como instrumento de una democracia representativa. Por consiguiente, esto concuerda absolutamente con el hecho de que los jóvenes cansados y desilusionados de la democracia formal sean aquellos que se suman de manera masiva a las movilizaciones y que al mismo tiempo se niegan rotundamente a ser partícipes de los comicios.

Al interpretar esta crisis de representatividad existente en la sociedad chilena, se puede observar que tiene un componente institucional que lamentablemente no da pie a la profundización de una democracia limpia y el equilibrio del Estado, tal es el caso de lo cotidianamente visto, como una cámara ineficiente, conflicto de intereses entre los funcionarios públicos, corrupción de algunos organismos estatales, políticos designados, por mencionar algunos. En consecuencia, el movimiento estudiantil, y todo lo generado a partir de este, responden a las falencias de la democracia actual y a la severa crisis de igualdad de la que es presa la sociedad chilena.

Existe una especie de empoderamiento en el país y un cuestionamiento del orden institucional. A lo que se suma la interrogante de cómo el gobierno y la Concertación se ponen en sintonía con una ciudadanía que quiere cambios ahora. Así, tal como se ha observado, el oficialismo y la Concertación se encuentran altamente desvalorizadas. Consiguientemente a esta última, ya ni siquiera se le considera como oposición, sino más bien, ahora la verdadera oposición se encuentra en la calle.

Por lo tanto, ante este escenario las movilizaciones sociales responden a, una crisis de representatividad que es patente, un rechazo a la clase política que es generalizado y que en su totalidad se encuentra en tela de juicio, dado que finalmente la clase política da ideas pero no llega a la praxis.

Consideraciones finales

Repensar esta profunda crisis política y social implica definitivamente entender el cómo el actual escenario político abrió un sendero absolutamente favorable a las movilizaciones y que dio la posibilidad de convergir a actores sociales que antes estaban desconectados, tales como los estudiantes, ecologistas, profesores, opositores a la derecha, defensores de una asamblea constituyente, etc., y que al mismo tiempo, las manifestaciones colectivas alcanzaron un cierto grado de reconocimiento por parte de la ciudadanía, legitimándose delante de una opinión pública que antes se mostraba escéptica y escasamente receptiva de ellos. Existe un problema clave que no tiene que ver con la desigualdad en la distribución de los recursos, sino que se centra en la desigualdad en la contribución de estos. Por lo tanto, el lucro en la educación tiene que ver directamente con la materialización de una queja que no pudo aguantar más y explotó.

En el trasfondo hay un rechazo hacia la clase política y un sentimiento de cansancio frente a promesas incumplidas. Hay un desprecio a la política. Considerándoseles dentro de un mismo conjunto, el gobierno y la Concertación no se ponen en sintonía con una ciudadanía que quiere cambios radicales, profundos, y los quiere ahora, generando de esta forma un cuestionamiento del orden institucional. Por consiguiente y tal como se vio en las páginas anteriores, la Alianza y la Concertación están muy desvalorizadas según las encuestas, y claramente la oposición se encuentra en la calle. En base a esto ¿cómo se puede gobernar un país a partir de esa realidad?

Al sistema político, pocas veces se le presentó un escenario como el actual, con un gobierno que muestra una nula capacidad del manejo político, y por ende, de negociación; y que no asume la necesidad de una discusión más profunda respecto de las transformaciones del sistema político y económico que permita institucionalizar las nuevas formas de acción y participación. Por otra parte, la ahora mal llamada oposición, (refiriéndome a la Concertación) no convoca ni representa, reflejando niveles históricos de rechazo, y siendo incapaz de recoger el malestar y las variadas demandas que se han manifestado estos últimos meses.

Consiguientemente el escenario es disperso, dado lo anterior, el gobierno y los partidos no logran institucionalizar el conflicto; y en paralelo, se pierde la capacidad de tomar decisiones y canalizar las demandas de la ciudadanía, poniendo así en jaque la gobernabilidad institucional y la capacidad de llegar a consensos, por sobre las legítimas demandas de ciudadanos que buscan algo más que estabilidad política.

Presumir que Chile resolverá este radical malestar, cuyo origen es la profunda desigualdad social, con el crecimiento económico, es una fórmula que fracasó durante los cuatro gobiernos de la Concertación y que ahora se intensifica con un gobierno de derecha. Por lo cual más cuestionable aún resulta pensar, el enfrentar esta crisis de representatividad y preguntar-

se, ¿Cuál es el grado de pluralidad ideológica que existe en este país? ¿Se refleja en el sistema político?

En fin, lo que debe existir es un cambio de modelo, es decir, la transición desde una noción de democracia considerada como un simple mecanismo de moderación de la desigualdad, a una noción de igualdad, en la que las desigualdades sociales se tornan casi inexistentes. Por lo tanto, este estallido social responde a un reclamo por una nueva noción de democracia igualitaria, siendo la fiel expresión de un país que se encuentra enfermo, en el cual el síntoma es la anormalidad política institucional y cuya cura es el cambio constitucional. En consecuencia, claro está que si este malestar social no se soluciona por la vía institucional, que permite la promulgación de nuevas leyes y pactos sociales a través de las constituciones, la crisis será total e irreversible.

Notas

¹El Centro de Estudios Público (CEP) entregó el 4 de agosto los resultados del Estudio Nacional de Opinión Pública, correspondiente a su vez, a los resultados de la encuesta realizada entre los meses de junio y julio.

²Adimark es una empresa dedicada a la Investigación de Mercado y Opinión Pública. Realiza estudios de tipo cuantitativo y cualitativo, encuestas en muestras probabilísticas, estudios de “focus-groups” y otras herramientas de recolección y análisis de información.

³Cifras de marchas por Patagonia sin Represas, según los informes de los periódicos de circulación nacional.

⁴Endesa. Empresa relacionada con la generación y comercialización de energía eléctrica.

⁵La fecha llevada a cabo la huelga de los trabajadores del cobre resulta significativa, pues el 11 de julio de este año se cumplieron 40 años desde la nacionalización del cobre en el gobierno de Salvador Allende.

Bibliografía

ADIMARK Gfk (2011), *Encuesta de Opinión Pública: Evaluación Gestión del Gobierno*, junio, julio y agosto 2011, ADIMARK, Santiago.

Centro de Estudios Públicos (2011), *Informe del Estudio Nacional de Opinión Pública N°64*, junio – julio 2011, CEP: http://www.cepchile.cl/dms/lang_1/doc_4844.html

Foerster, R. y Vergara, J. (2000), “Los mapuches y la lucha por el reconocimiento en la sociedad chilena” en *XII Congreso Internacional. Derecho consuetudinario y pluralismo legal: desafíos en el tercer milenio*, Arica.

Jocelyn-Holt, A. et al. (2001), *Historia del siglo XX chileno*, Ed. Sudamericana, Santiago de Chile.

OCDE (2010), *Education at a Glance 2010*, OCDE, Paris. http://www.OCDE.org/document/2/0,3746,en_2649_37455_48634114_1_1_1_37455,00.html

Ídem (2011), *Society at a Glance*, OCDE, Paris: http://www.OCDE.org/document/24/0,3746,en_2649_34637_2671576_1_1_1_1,00.html

Tarrow, S. (1997) *El poder en movimiento: los movimientos sociales, la acción colectiva y la política*, Alianza, Madrid.

The New York Times (2011), edición del 5 de agosto, New York.

* * *

Recibido: 14.09.2011

Aceptado: 23.11.2011